

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ARGENTINA: UNA MIRADA DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

Martín BECERRA¹
Guillermo MASTRINI²

Introducción

En forma paralela a la formalización de las primeras ideas en torno a la Sociedad de la Información, la Argentina consagró en el diseño y ejecución de su política económica, en el último cuarto de Siglo XX, las teorías monetaristas neoliberales. Esto supuso la apertura acrítica de la economía argentina, el fin de la etapa de sustitución de importaciones y el renunciamiento a políticas estratégicas de desarrollo autónomo, entre ellas las vinculadas con las actividades de información y comunicación (en adelante, infocomunicación).

De hecho, mientras los países desarrollados asumían el desafío profundizar un modelo de valorización de capitales basado en la relación entre la investigación científica básica y aplicada y el aparato productivo, la Argentina inició desde 1975 (y profundizó a partir del golpe militar de marzo de 1976) un proceso de desmantelamiento de su producción, que en términos relativos al subcontinente era importante, y de desinversión en las áreas de educación, ciencia y tecnología.

Carente el país de una política industrial autónoma y de una estrategia de innovación y desarrollo científico tecnológica, la aproximación al estudio de la Sociedad de la Información en la Argentina debe hacerse por vías indirectas. En primer lugar, a través del estudio de los procesos de incorporación de tecnologías de información y comunicación en el marco de la evolución de los mercados de estas actividades. En segundo lugar, a partir de la década del noventa, a través del análisis de las políticas neo-difusionistas de las tecnologías y los contenidos arquetipos de la Sociedad de la Información.

¹ Departamento de Ciencias Sociales – UNQ – 1876 – Bernal – Provincia de Buenos Aires – Argentina.

² Carrera de Ciencias de la Comunicación – Facultad de Ciencias Sociales – UBA – 1192 – Buenos Aires – Argentina.

En este plano analítico es preciso presentar las aproximaciones a la Sociedad de la Información (en adelante, SI), en tanto proyecto formulado inicialmente por la Comisión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 1994 y 1996) y el Gobierno de los Estados Unidos de América (GORE, 1994). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997), también contribuyó a precisar sus contornos, que se exploran en las siguientes líneas.

El concepto de Sociedad de la Información

La Sociedad de la Información es un proyecto que, desarrollado en los países centrales, reconoce el protagonismo de las tecnologías infocomunicacionales en la estructuración de las sociedades contemporáneas. Según la Comisión Europea, (1996, p.9):

En los últimos veinte años venimos presenciando una revolución en las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) cuyo alcance es mucho mayor de lo que nosotros pudimos haber imaginado. Uno de los principales efectos de estas nuevas tecnologías ha sido la reducción drástica del coste y del tiempo necesario para almacenar, procesar y transmitir la información. Estos impresionantes cambios afectan de manera fundamental el modo en que organizamos la producción y distribución de bienes y servicios y, por ende, el propio trabajo.

En rigor, la sociedad informacional enuncia cambios sociales y económicos: en la estructura de los países centrales emergen manifestaciones que se conjugan con el salto tecnológico convergente de las actividades infocomunicacionales, que facilitan no sólo “la disposición de nuevos productos (finales o intermedios, de consumo productivo o improductivo) y añaden un nuevo valor a aquellos procesos en los que se incorporan sino que además comportan un específico tipo de práctica social en relación con la información” (TORRES LÓPEZ y ZALLO, 1991). Los cambios también aparecen definidos por la utilización de la información tanto en su carácter de insumo, como en su rol de fuerza motriz en la reestructuración de los procesos productivos.

Como iniciativa política y a nivel programático, la Sociedad de la Información se articula por el dominio de tres ideas fuerza: la desregulación, la liberalización y la integración competitiva del planeta como escenario de realización de la economía de mercado. En el proyecto de la Sociedad de la Información la articulación entre un recurso tradicionalmente ideológico como la información o la comunicación, y la estructura económica, es constitutivo. Y puede afirmarse, con Van Audenhove et al. (1999), que hay dos suposiciones macroeconómicas instaladas en la base del escenario

en construcción: que la competencia en todos los niveles es una precondition para el desarrollo económico y la prosperidad, y que la intervención del sector público tiene un efecto restrictivo en el desarrollo. Sin embargo, advierten los autores, la liberalización, la expansión infraestructural, la desregulación, el desarrollo económico y la distribución social de los bienes y servicios no están relacionados en forma causal. Como lo demuestra la experiencia liberalizadora y privatista argentina en los años noventa, esos procesos en realidad son eventualmente excluyentes.

Hoy, después de una década de formulación orgánica del proyecto de la sociedad informacional, y después de prácticamente tres décadas de salto tecnológico convergente infocomunicacional, puede asegurarse incluso que la experiencia empírica demuestra que la liberalización puede contradecirse con la desregulación; que el desarrollo económico y la distribución social de los bienes y servicios no tienen directa relación con el desarrollo infraestructural en el sector de la información y que, las medidas liberalizadoras y privatizadoras no suelen tener un impacto positivo en cuanto al acceso de la mayoría de la población a mejores estándares de vida. En este sentido, “un mundo de abundancia es proyectado mientras se fabrica escasez” (VAN AUDENHOVE et al., 1999, p.391).

Con todo, la mención de las contradicciones inherentes al proyecto de Sociedad de la Información no debe impedir el análisis de las condiciones objetivas que intervienen en su materialización. La creciente centralidad de los bienes y servicios infocomunicacionales, su potencial convergente, la conjugación de su funcionamiento en un mercado mundial de tipo comercial oligopólico junto con la globalización, la concentración de la propiedad y de los canales de distribución de esos bienes y servicios, son algunas de las tendencias que confluyen en la sociedad informacional.

Asimismo la Sociedad de la Información, con su vocación planetaria de interconexión, encuentra un escollo serio en la falta de acceso (o condiciones débiles de acceso) de vastos sectores del globo. La “brecha digital” es inherente, en este sentido, a la lógica de distribución y apropiación de mercancías y servicios en la formación capitalista. La brecha no se expresa solamente a partir de referencias geográficas sino fundamentalmente a partir de causas y efectos socioeconómicos, pues se instala aún en cada bolsón de pobreza de los centros urbanos de los países centrales.

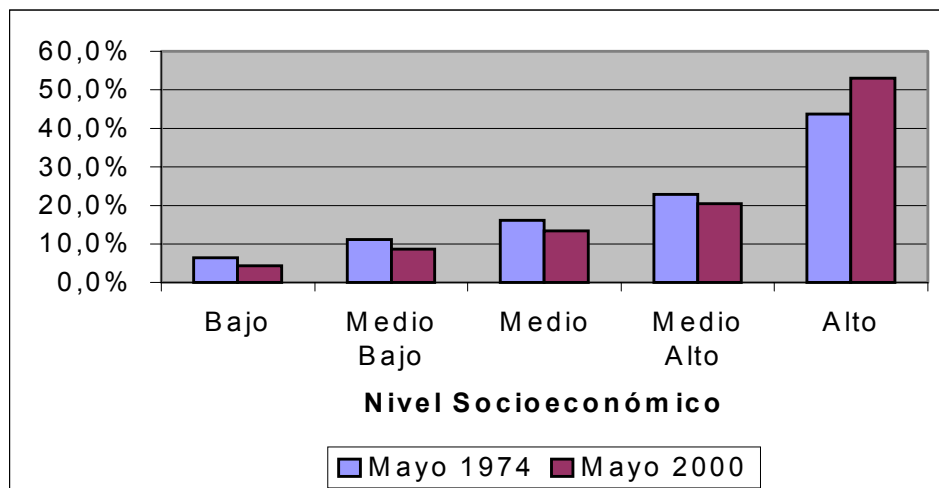
Políticas tecnológicas en la Argentina

En tanto fórmulas productivas, las tecnologías infocomunicacionales aspiran apuntalar las políticas de crecimiento económico, aunque ello no significa que ese

crecimiento redunde necesariamente en bienestar. En países donde la cohesión no forma parte de la agenda gubernamental desde hace por lo menos un cuarto de siglo como la Argentina, la presencia de tecnologías infocomunicacionales que sustenta el proyecto de la Sociedad de la Información se coliga con una creciente regresividad en la distribución de los ingresos, por lo que su impacto social dista de ser positivo.

Un trabajo de la Consultora Equis (ver RESTIVO, 2002), da cuentas de los indicadores de esta regresividad: mientras que los sectores bajo, medio bajo, medio y medio alto sufrieron un recorte en su participación en la distribución del ingreso, el único sector de la sociedad beneficiado con las políticas económicas de los últimos 25 años fue el quintil más alto, tal como muestra el cuadro:

Cuadro 1 - Distribución del Ingreso en la Argentina, 1974-2000



La evolución de la tendencia regresiva fue particularmente significativa en la participación de los sectores sociales más bajos (caída del 32,8%) y medio-bajos (22,3%), mientras que los sectores medios perdieron un 16,1% y los sectores medio-altos resignaron su participación en un 10,1%. El único sector social beneficiado por la política distributiva en la Argentina del último cuarto de siglo fue el sector alto, que recibe hoy un 21,2% más que en 1974.

Como advierte Zallo (1988), la innovación tecnológica adquiere un sentido que la aparta de su presunta neutralidad cuando se inserta en un escenario social determinado. En la Argentina la coincidencia y aplicación del salto tecnológico convergente con políticas regresivas en la distribución del ingreso, con la desindustrialización y con la utilización del desempleo como disciplinador estructural,

tiende a condicionar los efectos sociales y culturales de la diseminación de tecnologías. Basualdo expone el sentido estratégico de dichas políticas:

La distribución del ingreso crecientemente regresiva se pone en marcha desde el mismo momento del golpe militar de 1976, sustentándose tanto en la reducción del salario real como en la expulsión de trabajadores del mercado de trabajo. Si bien ambos factores están presentes en el deterioro de las condiciones de vida que sufren los asalariados argentinos durante los últimos 25 años, todo parece indicar que dicha concentración del ingreso responde, hasta los años noventa, principalmente al deterioro del salario real, y durante la última década al inédito grado de desocupación que resulta de las denominadas “reformas estructurales” y la consolidación de la desindustrialización. (2001, p.24)

Es con este contexto que la Argentina atestigua el salto tecnológico convergente. De modo que si, como señala el Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea, habrá en el futuro varias clases de “sociedades de la información”, tal como hubo y hay distintos modelos de “sociedades industrializadas”, en función de las estrategias de inclusión y cohesión social que cada sociedad desarrolle (“diferirán en el grado en que eviten la exclusión social y creen nuevas oportunidades para los (sectores) más desfavorecidos” (COMISIÓN EUROPEA, 1997, p.16), parece atinado señalar que la Argentina está lejos de prepararse para conformar un escenario donde los beneficios del salto informacional sean equitativamente distribuidos o inspirados en políticas inclusivas.

Esta situación es paradójica respecto de algunas tendencias de desarrollo que la Argentina tuvo desde los años 30 y hasta mediados de los 70. Si bien en ese lapso la Argentina formó parte de los mal llamados países en vías de desarrollo, había alcanzado un cierto nivel de industrialización primaria y pesada y contaba con un alto grado de alfabetización y de recursos humanos altamente formados. A partir de este contexto resulta comprensible que a comienzos de la década del 70 la Argentina fuese uno de los países más avanzados de la región en materia de desarrollos tecnológicos vinculados a la microelectrónica y la informática. Barona señalaba al respecto:

Argentina es un país con una importante estructura científica y tecnológica, con un nivel de educación muy alto y con un gran potencial para desarrollar e industrializar avances tecnológicos en microelectrónica. (...) Los primeros intentos en microelectrónica se iniciaron en la Argentina en los años sesenta y para 1974 ya se trabajaba en el desarrollo de transistores planares de silicio en el grupo de microelectrónica de CITEFA (Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas). Este grupo se integró al CENICE (Centro Nacional de Investigación en componentes electrónicos) cuando este se creó en 1977, con el

apoyo de las instituciones estatales que representan los sectores de ciencia y tecnología, industria y defensa. (1987, p.41)

La cita de Barona, más allá del optimismo propio del reverdecer democrático, deja constancia de dos factores muy importantes. En primer lugar, el rol que ocupaban las Fuerzas Armadas en la planificación estratégica. En segundo lugar, que precisamente la idea de planificación estratégica estaba siendo socavada por los sectores de orientación neoliberal que habían arribado al poder en 1976 con el golpe militar. La primera mitad de la década del 70 fue escenario de la puja entre sectores nacionalistas minoritarios de las fuerzas armadas que pretendían sumarse a las estrategias de desarrollo de la alianza de clases entre una parte del empresariado local y el sector del trabajo expresado por el peronismo hasta 1975, y por otro lado los sectores concentrados cuya lógica era reimplantar el modelo de acumulación de fines del siglo XIX y que contaron con el sostén mayoritario de las fuerzas de seguridad y, conforme se acercaba el año 1976, con el consenso más o menos explícito de los dos grandes partidos políticos (peronismo y radicalismo).

El triunfo del *establishment* agrícola-financiero en 1976 implicó el desmantelamiento de la producción. Un ejemplo es el de la empresa Fate, de capital nacional, que dominaba el mercado nacional de minicomputadoras. Argumedo señala (1987, p.172) que Fate producía los minicomputadores a partir de tecnología propia y utilizaba sólo un 20% de componentes importados. El fin de la protección estatal a estas industrias a partir de las medidas tomadas por el ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, permitió que las corporaciones extranjeras dominaran el mercado, en el momento que este iniciaba su expansión.

Con la recuperación del sistema constitucional en 1983, algunos sectores intentaron reactivar la investigación y la producción. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación creó la Comisión Nacional de Informática, que aglutinó a diversos grupos académicos e industriales. La Comisión llegó a elaborar un Proyecto Nacional Estratégico, que implicaba a la vez desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos para el sector productivo, así como capacitación para los usuarios. Un ejemplo de esta política fue la creación del Programa de Desarrollo Informático en las Pequeñas y Medianas Empresas, que planteaba “promover el uso de equipamiento y software de producción nacional, de conformidad con la política informática y teniendo en vista el interés del usuario” (Art. 2 Res. 125/85, Sec. Ciencia y Técnica). Sin embargo, y como sostiene Pasquini Durán, el Plan Informático Argentino no siguió la lógica proteccionista ya adoptada por Brasil (PASQUINI DURÁN, 1987, p.21).

Los intentos por aplicar una política informática a partir de 1983 se vieron abortados ante el fracaso de una política económica que proclamaba la ciclópea intención de congeniar el desarrollo con el pago de la deuda externa. Su reemplazo por programas económicos dictados por el FMI llevó al retorno de las políticas de apertura indiscriminada y liberalización de la economía.

La orientación político-económica a partir de 1985 asumió la necesidad de desprenderse de las empresas públicas y la profundización de la apertura de la economía. La oposición parlamentaria del peronismo (la historia posterior demostraría el carácter oportunista de tal postura, invertida a partir de los dos gobiernos peronistas del privatizador Carlos Menem, iniciados en 1989) impidió que se concreten entonces las privatizaciones. Cabe destacar que desde mediados de 1984 surgen en la Argentina los primeros BBS (*Bulletin Board System*) antecedente de los *newsgroups* que se popularizarían en la década siguiente. Según Ezequiel Fejler (1999, p.42) ya en 1987, existían conexiones locales a FidoNet, precursora de la comunidad virtual internacional.

La llegada al gobierno de Menem en 1989 implicó la consolidación de un modelo de acumulación basado en la valorización financiera con consenso inicial ya que, en palabras de Basualdo, “a partir de la superación de la inflación, del nuevo ciclo de endeudamiento externo y de la expansión de un crédito interno, se genera un ciclo expansivo del consumo interno que incorpora a vastos sectores sociales, dando lugar a la etapa de mayor consenso social del nuevo modelo de acumulación” (2000, p.66).

Una de las claves del nuevo modelo económico fue la privatización masiva de empresas públicas. Entre ellas se destacaron los canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). En este caso, los futuros adjudicatarios aprovecharían en primer lugar la inversión realizada en los últimos años de la gestión estatal. Además el Estado se hizo cargo, antes de la entrega de la empresa, tanto de un aumento sustantivo de la tarifa como de realizar despidos masivos de personal. La extraordinaria renta obtenida por los nuevos licenciatarios de la telefonía básica (vinculados a las telefónicas entonces estatales de Francia e Italia en el caso de Telecom, y de España en el caso de Telefónica) permitió la modernización de la red, aunque de acuerdo a los intereses de los inversionistas privados. En la Argentina no se ha definido, por ejemplo, el aporte que por ley deberían hacer los operadores telefónicos al fondo que financiaría el servicio universal, destinado a garantizar el acceso de los sectores más pobres y alejados de los centros urbanos.

Además de las políticas de privatización y liberalización llevadas adelante por el gobierno de Menem, el alineamiento con Washington llevó a desarticular los escasos

proyectos de desarrollo tecnológico nacional que habían sobrevivido como el plan nuclear y el programa aeroespacial. A partir de lo expuesto, puede señalarse que la integración plena y acrítica de la Argentina a los planteos de la sociedad global de la información en un rol subordinado, puede ayudar a entender la grave crisis económica, política y social, por la que atraviesa el país desde fines de 2001.

En el plano del desarrollo informático, debe recordarse que en 1995 comienza a comercializarse Internet en el país, pero fue recién en 1997 cuando el servicio se popularizó a partir de la reducción en los costos de conexión telefónica y en la de los abonos de servicio.

La Argentina presenta entonces en los años noventa indicadores de crecimiento de abonos telefónicos. Asimismo, registró el nacimiento y desarrollo de la telefonía celular y de Internet. El Informe de Desarrollo Humano 2001 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo expone en cifras comparativas relativas a esa década, en el cuadro que se presenta a continuación y al que se agregaron otros países como indicador de la cobertura de aplicaciones de tecnologías de telecomunicaciones e informática en América Latina y los indicadores de los países centrales o “de alto ingreso”:

Cuadro 2

PAÍS	TELÉFONOS ESTACIONARIOS (POR 1.000 PERSONAS)		SUSCRIPCIONES A TEL CELULARES (POR 1.000 PERSONAS)		HOSTS DE INTERNET (POR 1.000 PERSONAS)	
	1990	1999	1990	1999	1995	2000
ARGENTINA	93	201	(.)	121	0.2	8.7
BRASIL	65	149	(.)	89	0.2	7.2
CHILE	66	207	1	151	0.7	6.2
COLOMBIA	75	160	(.)	75	0.1	1.9
MÉXICO	65	112	1	79	0.2	9.2
VENEZUELA	82	109	(.)	143	0.1	1.2
PROMEDIO PAÍSES DE ALTO INGRESO	470	591	13	373	10.8	95.2

Fuente: PNUD (2001)

Las cifras apuntadas revelan que los países latinoamericanos con mejores indicadores en difusión tecnológica contaban, en el año 2000, con una situación muy inferior a la de los países centrales en 1990 en la industria de telecomunicaciones, y de las cifras de 1995 en lo relativo a *hostings* de Internet. Ello motivó en distintos

países latinoamericanos la creación de áreas encargadas de desarrollo de planes y proyectos para revertir el atraso de industrias y tecnologías infocomunicacionales.

Chile, por ejemplo, se sitúa en la vanguardia en Sudamérica mediante programas de informática aplicada a la educación que cubre más del 90 por ciento del estudiantado de educación básica y media (Proyecto “Red Enlaces”) y ha desarrollado varios programas de e-gobierno. Brasil cuenta con un ambicioso plan de desarrollo de sociedad informacional elaborado previo a la asunción del presidente Lula Da Silva, cuyo actual ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, en una demostración de la mirada estratégica brasileña, propuso al gobierno argentino el desarrollo conjunto de una norma propia para televisión digital, a la que se sumaría también China, con lo que habría un mercado potencial de más de 1.500 millones de televidentes. Estos dos casos, Brasil y Chile, contrastan con la fragilidad con que la Argentina ha encarado las políticas infocomunicacionales en el marco de la sociedad informacional.

Las palabras y las cosas

En sintonía con un desarrollo inscripto en coordenadas liberalizadoras a ultranza, los programas en la Argentina han sido arquetipos de un paradigma difusionista, expresado en la suposición de que la mayor presencia de las nuevas tecnologías infocomunicacionales en la sociedad permitirán, automáticamente, desarrollar la sociedad de la información.

Las iniciativas gubernamentales sobre la sociedad informacional se fueron acumulando –sin orden o lógica de articulación- a partir de 1997. Dos programas han permitido estructurar esas iniciativas: el Programa “argentin@internet.todos”, del segundo gobierno de Menem (1995-1999); y el Programa Nacional para la Sociedad de la Información” (PSI), del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001). Ambos presentan ejes de continuidad y permiten esbozar líneas de análisis firmes acerca de la falta de una política prioritaria de la Argentina sobre la sociedad informacional, toda vez que el nivel de concreción de esos Programas fue y sigue siendo muy débil.

El abordaje de los condicionamientos que provocaron la debilidad de las iniciativas argentinas debe asumir no sólo las limitaciones conceptuales propias de los proyectos (adscripción al paradigma difusionista; determinismo tecnológico; falta de inserción de los planes en el marco de una política de crecimiento equitativo), sino también la contracción de la actividad económica que relegó las estrategias de desarrollo conforme se instalaron las políticas de ajuste que profundizaron la crisis.

Entre los programas y proyectos esbozados por las últimas gestiones se destacan:

- **Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001:** elaborado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se destaca la “aplicación de tecnologías modernas de información y comunicación” como una de las políticas del sector, subrayando las telecomunicaciones y la interconexión de redes. En este marco, se realizó una encuesta sobre usuarios de Internet en 1998, que no tuvo continuidad.

- **Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI):** fue delineado por el decreto 252/2000 (gobierno Fernando de la Rúa), en el marco de la Setcip (Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva). La Setcip era el organismo gubernamental encargado de la implementación del PSI. Este Programa recoge parte de los objetivos del Programa *argentin@internet.todos* (ver más adelante). El Programa no tuvo casi ejecución.

- **Proyecto Argentina Digital (PAD):** Este proyecto de la Sectip planteaba que a fines de 2003 todas las escuelas argentinas estuvieran conectadas a Internet, pero ese objetivo no parece realista a la luz de los acontecimientos y del muy escaso avance del Proyecto.

- **Decreto PEN 554/97:** en 1997 el ex presidente Menem declaró de Interés Nacional el acceso a Internet de los habitantes de la Argentina. Facultó a la Secretaría de Comunicaciones a “desarrollar un plan estratégico para la expansión de Internet” y a “fomentar el uso de Internet como soporte de actividades educativas, culturales, informativas, recreativas y relativas a la provisión de servicios de salud”. El Proyecto no se desarrolló.

- **Programa *argentin@internet.todos* (Decreto PEN 1018/98):** en 1998 se creó el programa para el desarrollo de las comunicaciones telemáticas *argentin@internet.todos*, destinado a “promover el acceso universal a Internet y a la tecnología de la información”; “promover en el ámbito nacional la constitución de Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)”. Se fijó un aporte de 12 millones de dólares para administrar este programa, a través de un convenio que se realizaría con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), “destinado al estudio, diseño, ejecución y administración de todos los proyectos específicos relacionados con el Programa”. En el marco de este Programa se declaró de Interés Nacional (Decreto 1335/99), el proyecto “una dirección de correo electrónico para cada argentino”, cuyo propósito era proveer una cuenta de email gratuita para cada habitante, y daba 45 días de plazo a la Secretaría de Comunicaciones para implementar la medida. Ni los objetivos ni los tiempos de ejecución se cumplieron y la iniciativa quedó archivada.

El sector infocomunicacional en la Argentina

El desarrollo de las industrias culturales no puede pensarse sino en relación a la ubicación relativa de la Argentina en el contexto regional. Si en el plano político económico el país sostuvo en gran parte del siglo XX niveles de desarrollo superiores al promedio regional, en el último cuarto de la centuria operó claramente como cabeza de playa de experimentos neoliberales: privatización, transregulación, concentración y transnacionalización de la propiedad y centralización de capitales. Las industrias culturales argentinas, pioneras regionales en muchos casos, fuente de ingresos, y paradigma estético-productivo hasta los 70, alicaidas en los 80, han sido absorbidas por el capital extranjero y carecen de proyecto sólido.

Posiblemente sea el sector televisivo el que mejor ilustre el proceso. A más de cincuenta años de la primera transmisión de televisión en Argentina, ésta evidencia la concentración en su estructura de propiedad y la convergencia tecnológica con las telecomunicaciones y la informática. El tradicional paternalismo y la gestión artesanal con que los propietarios conducían personalmente a sus canales de TV, hoy ha cedido paso a nuevas tramas gerenciales a través de las cuales toman decisiones los capitales que controlan la industria (MASTRINI y BECERRA, 2001).

Si bien entre 1951 y 1989 la propiedad de los principales canales de televisión argentinos alternó entre el sector público y el privado, su funcionamiento estuvo signado por seguir el modelo comercial americano y el control político de los contenidos por parte de los diversos gobiernos. Menem dispuso en 1989 la privatización de las empresas de servicios públicos. Entonces no sólo se privatizaron los principales medios de comunicación de Buenos Aires, la telefonía y la compañía nacional de aeronavegación, sino también se concesionaron los servicios ferroviarios, de suministro eléctrico, de gas natural y de agua corriente.

Para privatizar los canales de televisión se modificaron parcialmente y/o derogaron aquellas partes de la Ley de Radiodifusión (n° 22.285 de 1980), que impedían la conformación de multimedios y la participación de la industria editorial. Desde comienzos de los noventa, el ingreso de propietarios de medios gráficos al sector audiovisual desató un proceso de concentración que no ha detenido su dinámica y que en líneas generales presenta como características principales:

- La irrupción del capital financiero internacional.
- La concentración económica en la propiedad y el desplazamiento de los actores tradicionales.
- Una tendencia a adecuar la normativa a los intereses económicos del sector privado.

- La superposición e inestabilidad de los organismos de control.
- La judicialización en torno a las definiciones sobre el sistema.
- La ausencia de debate en torno a las comunicaciones en la sociedad civil, en el Estado y en los partidos políticos.

Por su parte, la televisión por cable en la Argentina ha crecido en la última década hasta convertirse en el principal sistema de América Latina y uno de los más importantes -en términos porcentuales de población abonada- del mundo. El mercado, de su dinamismo inicial en los años ochenta, consagra actualmente el virtual duopolio de los MSO (Multi System Operator) Multicanal y Cablevisión.

La magnitud de la concentración de la producción y de la centralización de capitales sólo puede comprenderse al analizar los grupos multimedia. A modo de ejemplo, el Grupo Clarín, además de editar el diario homónimo (primero en circulación nacional) y el diario deportivo Olé (tercero), controla el Canal 13 de televisión y Radio Mitre, ambos ubicados entre los líderes en audiencia y facturación. También detenta la propiedad de Multicanal, principal operador de televisión por cable en América Latina con más de un millón de abonados. Su ingreso en el sector de las telecomunicaciones se produjo a través de la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), constituyéndose en la primera empresa en brindar el servicio de telefonía móvil en el interior de la Argentina³. Clarín también disputa el negocio de la televisión satelital, al participar de la empresa Direct TV. Finalmente el grupo participa en productoras televisivas y cinematográficas, agencias de noticias y suministra servicios de Internet.

Mientras tanto, el sector de las telecomunicaciones se consolidó en la última década como uno de los más dinámicos en materia económica, si bien a comienzos del nuevo siglo el efecto de la depresión económica se hace sentir con crudeza en el sector, ya que por primera vez en la historia se reduce la cantidad de teléfonos en uso y se registran desconexiones superiores al 10 por ciento del servicio de telefonía vocal básica por falta de pago (CANTON, 2002).

En relación al desarrollo de los servicios informáticos, la Argentina carece de estadísticas sistemáticamente elaboradas. No obstante, estimaciones privadas indican que los usuarios de Internet en el país eran más de medio millón de personas en 1999 y que la proyección de ese mercado al 2002 hacía trepar la cantidad de usuarios a los 6,7 millones de personas⁴. Sin embargo, a comienzos de 2003 los usuarios eran calculados en 4 millones (sobre 37 millones de habitantes), cifra que se corresponde con

³ Al aludir al interior del país, nos referimos al conjunto de las provincias argentinas, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

⁴ Fuente: *Anuario Clarín*, 2000-2001.

la aguda recesión económica que afecta al país desde 1998. La profundización de la crisis y la fuerte devaluación de la moneda a partir de enero de 2002, ha restringido el consumo en todas las áreas de la economía. El sector de las TIC's, con componentes casi exclusivamente importados, no escapa a este proceso.

Los principales prestadores de servicios vinculados a la informática están controlados por los grandes grupos infocomunicacionales como las operadoras telefónicas y el Grupo Clarín. Pero los procesos de convergencia parecen por ahora limitarse a una convergencia estructural de actores. En efecto, los grupos como Clarín y Telefónica si bien mantienen presencia en diversas ramas de las industrias culturales y las telecomunicaciones, organizan separadamente sus empresas, con consumos y cobros diferenciados. Ello permite reforzar el concepto de convergencia como proceso en construcción. El marco regulatorio también mantiene la separación de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Todo lo expresado anteriormente ha despertado nuevas preguntas tanto sobre las reales posibilidades de aplicación del modelo de convergencia a la compleja situación de las comunicaciones en la Argentina:

La condición de país periférico que caracteriza a la Argentina se constituye en este caso en una de las barreras para que la convergencia se concrete: la globalización de la economía encuentra límites evidentes cuando el propio mercado está restringido por escasa capacidad de consumo de la población. Este mismo camino se puede recorrer con respecto a la aplicación de los avances de la tecnología. Se puede señalar que si bien determinados desarrollos tecnológicos (fibra óptica, satélites, etc.) se constituyen ellos mismos en condición para la convergencia, no resultan suficientes para asegurar de manera completa el modelo. (URANGA et al., 2000)

Consideraciones finales

En el contexto de construcción de políticas de aliento a la centralidad de las actividades de infocomunicación y genéricamente agrupadas en proyectos bautizados como "Sociedad de la Información", el presente artículo exhibe los problemas de la aproximación neo-difusionista, con su fuerte determinismo tecnológico, en un país con escasa intervención del Estado y con una pobre tradición de servicio público y servicio universal en la gestión de las actividades de información y comunicación.

Esta relación entre la débil concreción registrada en las políticas enunciadas por los estamentos gubernamentales argentinos durante los años noventa, y la ausencia

de iniciativas garantes del acceso social a los bienes y servicios infocomunicacionales, repercute en fuertes carencias que el caso argentino plantea a la hora de planificar un modelo de desarrollo de sociedad informacional. Ello, a su vez, remite a la advertencia de Garnham cuando sostiene que “en los social se habla mucho de aplicaciones a la salud, la educación, etcétera. Pero la mayoría de estos avances que son prometidos podrían haber sido concretados hace años, con generaciones tecnológicas precedentes. Estas barreras, que son económicas, sociales y culturales no se derribarán si el desarrollo es dejado en manos de la ley del mercado” (1996).

Otra de las características del caso argentino es la inercia privatizadora que se instaló durante la última década del Siglo XX y que, al dejar en manos del mercado el desarrollo de las actividades infocomunicacionales (paradójicamente convertidas en factores elementales de definición de políticas económicas), impactaron en la materialización de un alto grado de concentración de la propiedad y de centralización de capitales. Estos procesos, articulados con la marcada ausencia de planificación estatal y el prejuicio gubernamental respecto del servicio público, revelaron su inestabilidad en los momentos de crisis, tendencia que se profundiza en el país con la depresión que se inició en 1998.

El análisis de la evolución de las industrias infocomunicacionales más importantes (telecomunicaciones, audiovisual e informática) y sus cruces convergentes permite concluir que su desarrollo fue importante en aquellos segmentos sociales con alta capacidad adquisitiva, pero los indicadores de cobertura y acceso presentan fuertes desequilibrios en el resto de la población.

La observación de dichas industrias no puede escindirse del análisis de su involución en los últimos años de depresión económica: por primera vez en el año 2002 el parque de telefonía vocal básica comienza a reducirse. Esta tendencia es significativa toda vez que se trata de una de las aplicaciones infocomunicacionales con mayor volumen de facturación. Lo mismo ocurre con la televisión por cable, o con la venta de diarios y revistas (BECERRA, 2002). Este dato se suma a la comprobación de la íntima vinculación entre proyecto político económico, políticas sociales y condiciones de difusión y apropiación tecnológica. En la Argentina la Sociedad de la Información exhibe, así, la retracción de sus principales industrias infocomunicacionales.

El proyecto de la Sociedad de la Información en la Argentina acompaña un proceso de reestructuración de la formación social existente y de las relaciones determinantes de las reglas del funcionamiento de la sociedad. Como advierte Castells, “el proceso de reestructuración no consiste en un simple mecanismo de adaptación. Se trata de un proceso políticamente determinado, puesto en práctica por gobiernos y organizaciones” (1995, p.23 y 24) y, por ende, las relaciones técnicas de producción

y la presencia de las actividades infocomunicacionales están estrechamente articuladas por el sentido que en cada país y en cada región se asigne a esa reestructuración: si en países con proyectos de cohesión social como eje rector (por ejemplo, los escandinavos) la Sociedad de la Información aparece tensionada por ese eje, en países con una fuerte fractura social y política como la Argentina, la Sociedad de la Información no puede apartarse del carácter regresivo de esa brecha.

Los indicadores de acceso y apropiación de tecnologías infocomunicacionales muestran que la Argentina cuenta todavía con mejores condiciones que muchos otros países latinoamericanos, pero manifiestan también un distanciamiento creciente con los indicadores de los países centrales.

En consecuencia, la demostración de que la diseminación tecnológica, tan cara al proyecto de sociedad informacional, no es una variable independiente del desarrollo social, encuentra en el caso argentino un ejemplo arquetipo ya que las debilidades señaladas en el artículo coinciden y se corresponden con la paulatina profundización de las tendencias regresivas en la participación que la mayor parte de la sociedad tiene en la distribución de los ingresos. Si así como hubo y hay una gran diversidad de sociedades industriales, asistimos actualmente a la construcción de una pluralidad de modelos de sociedad de la información, la Argentina tiene en el equilibrio social uno de los desafíos más urgentes que resolver.

Referencias

ANUARIO CLARÍN, Buenos Aires, 2000-2001.

ARGUMEDO, A **Un horizonte sin certezas**: América Latina ante la revolución científico-técnica. Buenos Aires: Puntosur, 1987.

BARONA, J. Situación y perspectiva de la informática y microelectrónica en el desarrollo económico de América Latina. In: DURÁN, J. M. P. (Comp.). **Comunicación, el tercer mundo frente a las nuevas tecnologías**. Buenos Aires: Legasa, 1987.

BASUALDO, E. **Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2000.

BASUALDO, E. **Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2001.

BECERRA, M. Industrias de la información: del sueño a la depresión. **Revista 3 Puntos**, Buenos Aires, n.287, p.42-4, 2002.

- CASTELLS, M. **La ciudad informacional**: tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza, 1995.
- CANTON, M. Por primera vez, se redujo la cantidad de teléfonos en uso. **Clarín**, Buenos Aires, 9 mayo 2002.
- COMISIÓN EUROPEA. **Europa y la sociedad global de la información**: Informe Bangeman, recomendaciones al Consejo Europeo. Bruselas, 1994.
- COMISIÓN EUROPEA. **Libro Verde Vivir y trabajar en la sociedad de la información**: prioridad para las personas. Suplemento 3/96 de la Unión Europea. Luxemburgo, 1996.
- COMISIÓN EUROPEA. **Building the european information society for us all**: informe final del Grupo Expertos de Alto Nivel de la Dirección de Empleo, relaciones industriales y custenioes sociales. Bruselas, 1997.
- FEJLER, E. **Comunidades virtuales en Internet**: el caso de la Argentina. 1999. Tesina(Licenciatura) – Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- GARNHAM, N. Le développement du multimedia: um déplacement dès rapports de force. In: AAVV. **La société face au multimedia**. Montpellier; IDATE, 1996. p.153-74.
- GORE, A Forging a new Athenian age of democracy. **Intermedia**, v.22, n.2, 1994.
- MASTRINI, G. ; BECERRA, M. 50 años de concentración de médios em América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización em escala. In: QUIRÓZ FERNANDEZ, F. ; SIERRA CABALLERO, F. (Ed.). **Globalización, comunicación y democracia**: crpitica de la economía política de la comunicación y la cultura. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2001. p. 179-208.
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLL ECONOMICO. **Towards a global information society, global information infratructure, global information society: policy requeriments**. Paris: ODCE, 1997.
- PASQUÍNI DURÁN, J. M. Introduction. In: _____. (Comp.). **Comunicación,el tercer mundo frente a las nuevas tecnologías**. Buenos Aires: Legasa, 1987.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. **Informe sobre desarrollo humano**. México, DF: Mundi-prensa, 2001.
- RESTIVO, N. La larga caída de la clase media. **Diario Clarín**, Buenos Aires, 28 enero, p.12, 2002.
- TORRES LÓPEZ, J. ; ZALLO, R. Economía de la información: nuevas mercancías, nuevos objetos teóricos. **Telos**, Madrid, n.28, p.54-67, 1991.

URANGA, W. et al. ¿hacia una econvergencia intersectorial? : análisis de la nueva normativa en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en la Argentina. In: JORNADAS NACIONALES DE INVESTITORES EN COMUNICACIÓN, 5, 2000, Paraná. **Ponencia...** Paraná (Argentina), 2000.

VAN AUDENHOVE, L. et al. Information society policy in the developing world: a critical assessment. **Third World Quarterly**, v.20, n.2, p. 387-404, 1999.

ZALLO, R. **Economía de la comunicación y la cultura**. Madrid: Akal, 1988.

— ** —

RESUMEN: Analizar el proyecto de la sociedad de la información en la Argentina plantea, en el plano conceptual, el doble desafío de procurar definir la sociedad informacional a pesar de la multiplicidad de lecturas y enfoques que circulan sobre el proyecto (que en rigor es un conjunto de procesos) y a la vez, hacerlo en el contexto de un país como la Argentina que no está situado en el centro del escenario donde ese proyecto se construye. La construcción de la sociedad informacional es contemporánea a la profundización de las brechas sociales y económicas en la Argentina y sus efectos, en consecuencia, distan de ser positivos.

PALABRAS-CLAVE: Sociedad de la información; economía política de las comunicaciones en el Argentina.

ABSTRACT: The analysis of the mass media project in Argentina, conceptually speaking, brings the double challenge of trying 1) to define the media society in spite of the multiple readings and focuses that surround the project, really a set of projects, and 2) to implement it in a country that is not in the center of such project. This construction of the media society happens when the social and economic gaps in Argentina are increasing and their effects are, therefore, far from being positive.

KEYWORDS: The media society; political economy of mass media in Argentina